

Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual

Resumen

El artículo que se presenta pretende dotar de un marco contextual al Trabajo Social Penitenciario, abordando para ello los aspectos básicos que configuran dicho marco en España: las cifras sobre el número de personas privadas de libertad y sus características (demografía penitenciaria), el marco jurídico que regula al medio, la evolución hasta la actualidad de la atención social a los/as reclusos/as y la configuración y características del Trabajo Social Penitenciario y los Servicios Sociales Penitenciarios.

Palabras clave

Trabajo Social. Servicios Sociales. Acción Social. Medio Penitenciario.

Context of penitentiary social work: current state

Abstract

The present paper aims to provide a contextual framework to the Penitentiary Social Work by addressing the main aspects that make up the aforementioned framework in Spain: the figures on the number of detainees and their characteristics (penitentiary demographics), the regulating legal framework, the evolution of social care to inmates until today and the configuration and characteristics of the Prison Social Work and Prison based Social Services.

Keywords

Social Work. Social Services. Social Action. Penitentiary System.

Author/Autor

Teresa Facal Fondo

Doctora en Sociología. Grado en Trabajo Social.
Directora EUTS adscrita a la Universidad de Santiago de Compostela.
tfacal@euts.es



Introducción

Este artículo pretende dotar de un marco contextual al abordaje de un ámbito de intervención que ha estado siempre alejado de los focos de interés de la disciplina, en parte por la propia opacidad del sistema penitenciario, siempre a expensas de la seguridad como eje central, en parte debido a la sequía teórica y a la escasa producción científica propia y finalmente en parte también por tratarse de un sector profesional reducido y con frecuencia aislado.

Sin buscar exhaustividad, imposible por otra parte por razones de espacio, se ofrece aquí una recopilación sucinta de los aspectos principales que configuran el panorama en el que los/as profesionales trabajadores/as sociales desarrollan su trabajo en el medio penitenciario: características de la población privada de libertad, marco jurídico, evolución y adscripción actual y configuración de la denominada Acción Social Penitenciaria y funciones de los/as trabajadores/as sociales en este medio.

1. La demografía penitenciaria

Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias¹, el sistema español cuenta con 68 Centros Penitenciarios y 32 Centros de Inserción Social (en adelante CIS) y la población reclusa asciende a 64.496 personas². De ellas, el 92,3% son hombres, el 7,7% mujeres³ (España encabeza junto a Rusia con un 8,3% y Chipre con un 7,6% el ranking respecto a población penitenciaria femenina) y el 29,1% son extranjeros (la media europea es de 23,5%).

La población penitenciaria en Europa es más “joven” que la española, con una edad media de

34 años, frente a los 37,58 de nuestros reclusos. Un 11,8% se encuentran en situación preventiva (más un 1% de población penada con preventivas) y entre los penados la clasificación según grado de tratamiento más frecuente es segundo grado (73,7%), seguido de tercer grado (15,9%).

Los datos del *Informe SPACE 2013 I y II*⁴ (Aebi y Delgrande, 2015) muestran que España es el 6º país con mayor número de población reclusa entre los miembros del Consejo de Europa (y el cuarto de la Unión Europea), con una ratio elevada de personas privadas de libertad por habitante (145,7 presos por cada 100.000 personas, frente a los 119,5 de Francia, los 108,6 de Italia o los 84,1 de Alemania) y es también el país de la Unión Europea con más reclusos cumpliendo condenas extensas, con el 4,7% de las sentencias impuestas iguales o superiores a 20 años, frente al 3,4% de Alemania o el 3,1% de Francia. Sin embargo, y aunque el número de personas privadas de libertad ha aumentado en España vertiginosamente en los últimos 30 años, a partir del año 2011 se ha producido un descenso significativo de la población carcelaria, paralelo al ocurrido en el contexto europeo: aunque en el periodo 2004-2013 aumentó un 13%, disminuyó un 5,1% entre 2010-2011, un 3,3% entre 2011 y 2012 y un 2,2% entre 2012 y 2013, lo que a falta de más datos seriados, permite afirmar que se mantiene la tendencia aunque se ha ralentizado el ritmo de descenso. Además, la tasa de ocupación de nuestras prisiones, está por debajo de la media europea, que se sitúa en 96 reclusos por cada 100 plazas disponibles, frente a los 87,4 del caso español.

Estos datos positivos siguen sin embargo resultando elevados con respecto a la tasa de criminalidad, que, siguiendo la tendencia general descendente de los últimos años, se sitúa en 2014

Context of penitentiary social work: current state

en 44,3 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, entre las más bajas de la Unión Europea. Esto hace pensar que en España se recurre a la cárcel sistemáticamente y que la pena de prisión ha ido asumiendo una duración mayor.

El delito más frecuente por el que han sido condenados los reclusos españoles es el robo, cometido por un 30,7%, frente a los delitos relacionados con la droga como categoría más frecuente en Europa (17,0%).

Respecto al gasto público por persona encarcelada las oscilaciones son altas, desde los 3,20€ por recluso en Grecia, hasta los 317€ de Suecia. España, con un coste de 53,34€, se encuentra muy por debajo de la media de los países miembros del Consejo de Europa, cifrada por el informe SPACE en 97€.

Finalmente, en cuanto a la mortalidad en las prisiones españolas, resulta muy elevada si la comparamos con Europa. En el año 2012 se registraron 191 fallecidos, ocupando el tercer lugar en Europa, después de Rusia y Turquía. De esa cifra global el 15,7% lo fue por suicidio, cifra esta vez baja si la comparamos con la de países como Francia (57,8%) o Alemania (47,9%).

En definitiva, el perfil más frecuente de la persona privada de libertad en España nos mostraría a un varón relativamente joven y que ha sido condenado por delitos contra la propiedad, clasificado en segundo grado de tratamiento.

2. El marco jurídico

Aunque las fuentes del ordenamiento jurídico penitenciario comprenden no solo las leyes y re-

glamentos, sino también otras normas de régimen interior (circulares, instrucciones y órdenes de servicio), a continuación se exponen aquellos textos legales que se consideran fuentes básicas o creadoras de normas:

La **Constitución Española de 1978**. Es el motor de arranque para un nuevo enfoque de la filosofía del bienestar, convirtiendo el fin resocializador de la pena en mandato constitucional. Su artículo 25 supone el punto de partida y la referencia obligada de la actividad penitenciaria, fijando las líneas generales para la ejecución de la pena, que posteriormente desarrollará la Ley General Penitenciaria 1/1979, primera ley orgánica de la democracia.

Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979. Establece las directrices del moderno sistema penitenciario. Regula tanto las Instituciones Penitenciarias como la actividad que se viene desarrollando en las mismas, matizando en su artículo 1 que tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de los detenidos, presos y penados. Consagra como rasgos más sobresalientes el principio de legalidad en la

notas

¹ Con referencia a julio de 2015.

² Total nacional, del que 9.128 corresponden a Cataluña, única Comunidad Autónoma que tiene las competencias transferidas en materia penitenciaria.

³ Dada la elevada proporción de hombres en el colectivo, en adelante las referencias a la población privada de libertad se harán en masculino.

⁴ Desde el año 1984, el Consejo de Europa (COE) realiza encuestas sobre la situación de las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en Europa (SPACE I) y medidas y sanciones no privativas de libertad (SPACE II).

Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual

ejecución de la pena, la potenciación del régimen abierto, la implantación del Juez de Vigilancia y en definitiva la instauración de un sistema penitenciario basado en la concepción de la pena como una medida de prevención especial encaminada a la reeducación y reinserción social de los penados.

Reglamento Penitenciario. Con el Real Decreto 190/1996 se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Incorpora a su texto las modificaciones producto de la entrada en vigor del nuevo Código Penal (Ley Orgánica 10/1995, que entró en vigor en mayo de 1996) y de los cambios en la composición y características de la población reclusa (una mayor presencia de mujeres y reclusos extranjeros, el envejecimiento en términos demográficos, la variación del perfil sociológico o la aparición de nuevas patologías con especial incidencia en la población reclusa). Recoge también los avances que han ido produciéndose en el campo de la intervención y tratamiento de los internos, haciendo hincapié en el componente resocializador.

Su artículo 227 indica que la Acción Social Penitenciaria se dirigirá a los problemas surgidos a los internos y a sus familias como consecuencia del ingreso en prisión, y contribuirá al desarrollo integral de los mismos.

Real Decreto 840/2011 por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la Comunidad y de localización permanente en centros penitenciarios. Establece las circunstancias de ejecución de las posibilidades contempladas en el vigente Código Penal como alternativas al ingreso en prisión: pena de trabajo en beneficio de la Comunidad, suspensiones de

condena y sustituciones de condena, con las que se pretende evitar los efectos desocializadores de la privación de libertad. Las unidades administrativas encargadas de la gestión de este tipo de penas son los Servicios de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, configuradas como equipos multidisciplinares en los que se integran los servicios sociales.

Entre la normativa relacionada más reciente, cabe destacar:

Código Penal. La última reforma del Código Penal, llevada a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, afecta a ámbitos muy diversos, pero en lo que respecta al cumplimiento de la condena, las principales reformas son:

- La clasificación directa a tercer grado por motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables y de los septuagenarios, valorando especialmente su escasa peligrosidad (artículo 36.3). Esta valoración será elaborada por las Juntas de Tratamiento a petición de las autoridades judiciales.
- La sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la expulsión del territorio nacional, bajo determinadas circunstancias, para ciudadanos extranjeros (artículo 89).
- La suspensión de la ejecución del resto de la pena y concesión de la libertad condicional bajo determinadas circunstancias (artículos 90, 91 y 92).
- La introducción de la nueva y controvertida modalidad punitiva de prisión permanente revisable.

Context of penitentiary social work: current state

3. La atención social a la población reclusa en España

La asistencia a los reclusos surge como una actividad vinculada a la caridad cristiana. Entre los siglos XII y XVI aparecen las cofradías religiosas, dedicadas a socorrer material y espiritualmente a los reclusos. A finales del siglo XVIII la preocupación por este colectivo adopta nuevas formas en las que se combina la acción espiritual con la filantrópica. Surgen las Asociaciones de Patronatos encargados de la protección de los presos y sus familias.

El comienzo se sitúa con la aprobación en Madrid, en agosto de 1779, de los Estatutos de la Asociación de Caridad bajo el título de *El Buen Pastor*. Los fines que se persiguen son los de socorrer y mejorar las condiciones de vida de los presos de la capital y enderezar la naturaleza moral del proceso. Su labor se convirtió en referencia para todos los que posteriormente se ocuparon de la reforma del sistema penitenciario, además de servir como modelo para la creación de numerosas asociaciones, con fines similares, en diversas capitales de provincias.

La Administración Pública comienza a plantearse la prestación oficial de asistencia a finales del S.XIX, intentando superar los aspectos caritativos que caracterizaban a las instituciones privadas. Comienza a hablarse de actividades planteadas en términos como pedagogía social, prevención de la delincuencia y prestación de ayuda a los reclusos y liberados.

En 1908 se crea la Junta del Patronato de Reclusos y Liberados, institución de carácter mixto que será la base de los posteriores Patronatos creados en el territorio español.

Por orden Ministerial de 7 de octubre de 1938 se crea el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, compuesto por funcionarios y presidido por el Jefe Nacional de Prisiones. Le compete todo lo relativo al trabajo penitenciario, redención de penas, la concesión de destinos, la asistencia religiosa, la biblioteca en las prisiones, etc. Del Patronato Central dependían las Juntas Locales, presididas por un representante del Alcalde, a los que competía el pago a las familias de los reclusos del producto del trabajo de éstos.

El Decreto de 9 de junio de 1939 atribuye al Patronato competencia sobre los liberados condicionales. Posteriormente y por sendos Decretos de 1943 se crean el Patronato Nacional de San Pablo, para presos y penados, cuya función entre otras era visitar a los enfermos y ser el nexo entre familias y presos y el Servicio de Libertad Vigilada, con la misión de observar la conducta y procurarles trabajo, funciones que eran compartidas con el Patronato. Estos dos Patronatos fueron suprimidos por Decretos del 29 de agosto y 29 de noviembre de 1967.

Finalmente, el Decreto de 12 de junio de 1968, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia, configura el Patronato de Nuestra Señora de la Merced como Organismo dependiente del Ministerio, del que recibe los medios económicos necesarios para ejercer sus funciones.

Las funciones del Patronato se regularon por el Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, y más concretamente en el Reglamento Orgánico del Ministerio de Justicia de 1968, ya que muchas de las contenidas en el primero pasaron a ser competencia del Organismo Autónomo de Trabajos.

Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual

Entre las funciones se pueden destacar:

- Informar las propuestas de concesión y, en su caso, revocación de libertad condicional.
- Autorizar a los penados a redimir su pena por el trabajo.
- Prestar apoyo y ayuda a los penados, a fin de colaborar en su regeneración y reforma, sirviendo de complemento al régimen penitenciario.
- Asistir y proteger material y moralmente a los internos de los establecimientos penitenciarios, a los liberados y familiares.

Todas estas funciones han estado vigentes hasta la entrada en vigor de la Ley Orgánica General Penitenciaria de 1/1979 de 26 de septiembre, que dispuso en su artículo 74 la creación de la Comisión de Asistencia Social (en adelante CAS). La CAS se regula por Real Decreto 1415/1983 de 30 de marzo y con ella desaparece el Patronato de Nuestra Señora de la Merced, cuyas funciones asume. El Decreto menciona por primera vez a los/as asistentes sociales, estableciendo una ratio mínima de un/una asistente social por cada cincuenta tutelados (art.104.1) y enunciando algunas de sus funciones (art.104.2).

Una nueva reestructuración traslada las funciones de asistencia social a los reclusos al *Organismo Autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias*, hasta entonces denominado *Trabajos Penitenciarios* (Real Decreto 326/1995). La Comisión de Asistencia Social se integra en dicho Organismo Autónomo como “órgano de colaboración interadministrativa” con las siguientes funciones:

- Definición de las líneas generales de las prestaciones sociales a los internos y liberados, y a los familiares de unos y otros.
- La colaboración de forma permanente con las instituciones, organismos y entidades dedicadas a la asistencia de los internos y a la rehabilitación de los excarcelados así como con las redes autonómicas, provinciales y locales de servicios sociales.

En 2004, el Real Decreto por el que se desarrolla la estructura básica del Ministerio del Interior (RD 1599/2004) atribuye algunas de las funciones que tenía asignadas el anteriormente denominado OATP (que ha pasado a denominarse *Organismo Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo* volviendo a asumir sus competencias iniciales) a la *Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria*, entre ellas la planificación, coordinación y gestión de la acción social de los internos de los centros penitenciarios, de los liberados condicionales y de las personas sometidas a penas alternativas y medidas de seguridad y sus familias.

En 2008, una nueva estructuración de los departamentos ministeriales (RD 438/2008 y 1181/2008) suprime la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, creando en su lugar una Secretaría General, con rango de Subsecretaría, de la que, tras una nueva modificación (RD 331/2009) pasarán a depender siete subdirecciones generales, entre las que se encuentra la *Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria* y la *Subdirección General de Penas y Medidas Alternativas*. A la primera le corresponden, entre otras funciones, el impulso y coordinación de programas de intervención con los internos y sobre todo los de especial problemática y el seguimiento y supervisión, según

Context of penitentiary social work: current state

modalidad, de los internos cuando pasen a cumplir condena bajo el régimen abierto, coordinación de los Centros de Inserción Social y Secciones Abiertas, Unidades Dependientes y medidas de control telemático y a la segunda, la planificación, coordinación y gestión de la acción social a internos y liberados condicionales y la gestión y seguimiento de penas y medidas alternativas, que sean competencia de la Administración Penitenciaria según la normativa vigente y en particular, la gestión, coordinación y seguimiento de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, de la suspensión de la ejecución de penas privativas de libertad y de la libertad condicional, elaborando los informes sobre estas competencias que requieran las autoridades judiciales competentes.

4. Trabajo social y servicios sociales penitenciarios

4.1.- La configuración de los Servicios Sociales Penitenciarios

La administración penitenciaria sitúa el cometido principal de solucionar los problemas surgidos a los internos y sus familias bajo la etiqueta acuñada por el Reglamento Penitenciario de 1996 como “Acción Social Penitenciaria”. Definida ésta en su concepción clásica bajo el prisma asistencial, se ha actualizado para concebirla como una “prestación especializada y circunscrita a las acciones que deriven directamente de la relación individuo-administración penitenciaria y cuyas funciones se complementan con las de los servicios comunitarios”.

Esta labor se desarrolla a través de los Servicios Sociales Penitenciarios (en Centros Penitenciarios

o Centros de Inserción) que se integran en los Equipos Técnicos y en las Juntas de Tratamiento y que dirigen sus tareas profesionales a las personas privadas de libertad, incluido el período de libertad condicional, en su caso.

El *Manual de Procedimientos y Pautas de Funcionamiento de las líneas de actuación de Trabajo Social* (I 04/2000), atribuye a los Servicios Sociales Penitenciarios un triple papel:

- Atención a los internos en Centros Penitenciarios.
- Constituir el vehículo de enlace con el exterior de los internos que disfrutan de permisos de salida, acceden a régimen abierto o la libertad condicional.
- Seguimiento de penas alternativas y cuantas medidas se les encomienden por los órganos judiciales competentes.

De lo dicho deriva un doble ámbito de actuación:

- En el interior de cada Centro Penitenciario, atendiendo a los internos y a sus familiares.
- En los Centros de Inserción Social, atendiendo a las familias y llevando a cabo el seguimiento de los internos en régimen abierto, liberados condicionales y las gestiones que conlleven, en cada caso, las penas alternativas a las de prisión y las medidas previstas en el Código Penal que se le encomienden.

Cada Centro Penitenciario tiene un Departamento de Trabajo Social, que cuando tiene tres o más trabajadores cuenta con un puesto de Coordinador/a de Trabajo Social.

Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual

Los Servicios Sociales Penitenciarios externos se desarrollan en los Centros de Inserción Social. Al frente de los mismos está el/la Jefe/Jefa de Servicios Sociales. La Administración Penitenciaria determinará en la orden de creación de cada CIS su integración orgánica y funcional en un centro penitenciario (CIS dependientes) o su consideración como centro penitenciario autónomo (CIS independientes).

A efectos de establecer una coordinación adecuada entre los Departamentos de Trabajo Social y sus respectivos Servicios Sociales Penitenciarios, se creará una *Comisión de Programación y Seguimiento de Trabajo Social* en aquellos Centros de los que dependan uno o más Servicios Sociales Penitenciarios. La Comisión estará presidida por el/la Director/a del Centro y formarán parte de ella el/la subdirector/a de Tratamiento, el o los Jefes de Servicios Sociales correspondientes y el/la coordinador/a de trabajo social. Sus cometidos básicos serán:

- Elaborar la programación de los Servicios Sociales en su conjunto.
- Valorar con carácter semestral el desarrollo y ejecución de la programación diseñada.
- Estimar las necesidades para la adecuada ejecución de las funciones encomendadas a los Servicios Sociales.
- Programar las pautas de coordinación entre los departamentos de Trabajo Social y los Servicios Sociales.

4.2.- Procedimientos básicos

Podemos señalar como procedimientos principales en los que intervienen los/as trabajadores sociales penitenciarios los siguientes:

- Atención al Ingreso en prisión.
- Atención al interno durante su estancia en prisión.
- Atención a las familias.
- Seguimiento de los internos en régimen abierto.
- Seguimiento de liberados condicionales.
- Seguimiento de medidas alternativas al ingreso en prisión (es decir, suspensiones/sustituciones de condena y medidas de seguridad).
- Programas de reinserción social (participación y colaboración con los equipos técnicos multidisciplinarios).

5. Consideraciones finales

A pesar de que no es el objetivo de este artículo enumerar o analizar los problemas existentes respecto al tema que nos ocupa, resulta difícil resistirse a apuntar algunas cuestiones sobre las que merece la pena reflexionar y que resultan fácilmente detectables en el contexto de búsqueda de información:

- Una primera cuestión tiene que ver con lo puramente terminológico, es decir, los textos y normas procedentes del medio penitenciario ¿cómo le llaman a lo nuestro? Podemos elaborar al respecto un extenso y confuso glosario de términos, casi siempre poco preciso, que en muchos casos nos devuelve el sabor añejo de etapas marcadas por la beneficencia: asistencia social, acción social penitenciaria, servicios de asistencia social, servicios

Context of penitentiary social work: current state

sociales penitenciarios, servicios sociales externos, etc. Si bien es cierto que se ha hecho un esfuerzo en este sentido, falta aún concisión y precisión, para eliminar denominaciones diferentes adjudicadas arbitrariamente a un mismo concepto y para establecer con claridad los contenidos de los términos.

- El sistema penitenciario español cuenta con un marco legal que mantiene y consolida el principio de reinserción social, tanto desde el punto de vista de la reacción penal como desde las normas que regulan la ejecución de las penas. Las actividades derivadas de la Acción Social Penitenciaria, la disciplina que sustenta las funciones derivadas de esta prestación –Trabajo Social– y el marco en el que se desarrollan dichas funciones –Servicios Sociales penitenciarios– constituyen pilares básicos del fin resocializador. Sin embargo, esta centralidad no parece tener correlato en el papel asignado a la Acción Social Penitenciaria en el esquema de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (resulta difícil encontrar en su página web el epígrafe que la define) ni en el papel asignado a la figura profesional de los/as trabajadores/as sociales en el medio.

BIBLIOGRAFÍA

Aebi, M.F. y Delgrande, N. (2015). *SPACE I-Council of Europe Annual Penal Statistics: Prison populations. Survey 2013*. Strasbourg: Council of Europe.

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 311, de 29 de diciembre de 1978.

Facal, T. (2003). *La reinserción social en el medio penitenciario*. Tesis doctoral inédita. A Coruña: Universidad de A Coruña. Material no publicado.

Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 de 26 de Septiembre. Boletín Oficial del Estado, 239, de 5 de octubre de 1979.

Ministerio del Interior (2000). *Manual de procedimiento y pautas de funcionamiento de las líneas de actuación de Trabajo Social. Instrucción 04/2000*. Recuperado en septiembre de 2015 de <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/instrucciones>

Ministerio del Interior (2005). *Protocolo de Trabajo Social en Instituciones Penitenciarias. Instrucción 15/2005*. Recuperado en septiembre de 2015 en <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/instrucciones>

Ministerio del Interior. Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2015). *La Acción Social Penitenciaria*. Recuperado de <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/PenasyMedidasAlternativas>

Ministerio del Interior (2015). *Aspectos de la ejecución penal afectados por la Reforma del Código Penal en la L.O. 1/2015 de 30 de marzo*. Recuperado en septiembre de 2015 de <http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/instrucciones>

Real Decreto 1415/1983, de 30 de Marzo, sobre Modificación del decreto 1530/1968, de 12 de Junio, por el que se aprueba el Reglamento organico del Ministerio de Justicia en lo relativo a la Comisión de Asistencia Social. (1983, 31 de mayo). Recuperado en septiembre de 2015 de <http://realdecreto.org/4444/real-decreto-1415-1983/>

Real Decreto 326/1995, de 3 de marzo, por el que se regula el organismo autónomo Trabajo y Prestaciones Penitenciarias. (1995, 13 marzo). Recuperado de http://noticias.juridicas.com/base_datos/Derogadas/r1-rd326-1995.html

Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. Boletín Oficial del Estado, 40, de 15 de febrero de 1996.

Real Decreto 1599/2004, de 2 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior (2004, 3 julio). Recuperado en septiembre de 2015 de <https://www.boe.es/boe/dias/2004/07/03/pdfs/A24646-24657.pdf>

Contextualización del trabajo social penitenciario: situación actual

Real Decreto 438/2008, de 14 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales. Boletín Oficial del Estado, 92, de 16 de abril de 2008.

Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Boletín Oficial del Estado, 171, de 16 de julio de 2008.

Real Decreto 331/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1181/2008, de 11 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del Interior. Boletín Oficial del Estado, 74, de 27 de marzo de 2009.

Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centros penitenciarios. Boletín Oficial del Estado, 145, de 18 de junio de 2011.